

# **CAPACIDAD PARA SER PARTE, CAPACIDAD PROCESAL Y LEGITIMACIÓN DE LA HERENCIA YACENTE\***

Fernando Gascón Inchausti

Rosa F.G. y otros c. José Luis M.F., Josefa A.L. e Indalecio F.G.

Audiencia Provincial de Badajoz (Sección Primera).

Sentencia de 23 de junio de 2000 (Recurso de apelación 468/99, frente a Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Olivenza).

Magistrado Ponente: Madrigal Martínez-Pereda.

Abogados: Novillo Antúnez y Gaitán Rebollo.

## ***Hechos y cuestiones jurídicas***

Tras la defunción de Dña. Eduarda G.C., uno de sus hijos, D. Indalecio F.G., vendió a D. José Luis M.F. y a Dña. Josefa A.L. un inmueble que formaba parte de la herencia aún yacente. Dña. Rosa F.G., junto con otros parientes de la fallecida, ejercitan acción para que se declare la nulidad de la compraventa y se cancele la correspondiente inscripción registral. Se plantea como excepción durante la primera instancia la ausencia de legitimación de los demandantes para ejercitar la acción en cuestión, dado que la herencia está yacente, al no haberse producido por el momento acto de aceptación por parte de ninguno de los llamados: habría de ser, en su caso, el administrador de la herencia quien ejercitara la acción en su nombre, y no los llamados a ella en nombre propio. El Juzgado, sin embargo, entiende existente una comunidad hereditaria, que permite a cualquiera de los comuneros actuar en beneficio de ésta, y estima la demanda. La misma cuestión se vuelve a suscitar por los demandados apelantes ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

## ***Fallo***

La Audiencia Provincial considera que la situación de yacencia impide hablar de comunidad hereditaria y niega legitimación a los demandantes para ejercitar la acción; también niega que esta legitimación pudiera ostentarla la propia herencia yacente, debido al carácter provisional de esta situación. En consecuencia, revoca la sentencia recurrida y la sustituye por otra de naturaleza absoluta.

## **COMENTARIO**

---

\* Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 23 de junio de 2000, publicado en *Tribunales de Justicia*, 2001-12, pp. 103-107.

La capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación –sólo pasiva o también activa– de la herencia yacente han sido tradicionalmente cuestiones sobre las que ha existido un importante grado de confusión y discrepancia en nuestra jurisprudencia, debido seguramente a la ausencia de regulación sobre esta materia tanto en el Código Civil como en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 –aunque, como veremos, la cuestión se ha aclarado notablemente con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000–.

Si ya de por sí no estaban claros ni la naturaleza jurídica ni los contornos de la herencia yacente desde un punto de vista sustantivo, poco podía esperarse de la traslación al proceso de estos problemas, razón por la cual han sido abundantes en la jurisprudencia las soluciones contradictorias y hasta los errores terminológicos.

Pues bien, la presente sentencia es un buen ejemplo de esta situación confusa, cuya respuesta cabal, a nuestro juicio, debería asentarse sobre una correcta asunción para el proceso civil de los resultados alcanzados en un plano estrictamente sustantivo.

En efecto, la doctrina civil mayoritaria coincide en calificar a la herencia yacente como masa patrimonial autónoma carente de titular de forma interina o provisional: dado que en nuestro sistema sucesorio (salvo en Navarra) la simple delación no atribuye al llamado la condición de heredero, sino que ésta sólo se adquiere una vez aceptada la herencia. Se produce así entre el momento de la muerte del causante y el de la aceptación una situación de ausencia de titularidad sobre el patrimonio relicto, que puede ser muy breve pero también muy prolongada... Durante este lapso de tiempo se entiende que la herencia está yacente, esto es, que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del difunto carece de titular. Ahora bien, es indudable que esta situación de interinidad no debería perjudicar a quienes afirmen ostentar derechos cuyo correlato se encuentre en esa masa (v.g., acreedores del causante, personas que tuvieran acción reivindicatoria respecto de alguno de los bienes aparentemente integrados en la masa), y tampoco debería la situación de yacencia tornarse en perjuicio de la propia herencia, cuya integridad puede verse amenazada si no se ejercitan ciertos derechos o acciones en plazo –plazo que puede ser inferior a aquél en que, de hecho, se produzca la aceptación de la herencia–. Por eso a la herencia yacente se le reconoce cierta autonomía, autonomía que curiosamente parece tener mayores repercusiones en la esfera procesal que en la estrictamente sustantiva.

En efecto, desde una perspectiva civil pura, la autonomía de la masa patrimonial que integra la herencia yacente no es tan amplia que permita reconocerle personalidad jurídica en sentido propio (cfr. STS de 31 de enero de 1994, RAJ 643), sin que tampoco pueda decirse que integre una comunidad de bienes –ni mucho menos una comunidad hereditaria–, pues no existen comuneros

al carecer justamente los bienes de titulares (como se encarga acertadamente de recordar la Audiencia Provincial de Badajoz en esta sentencia).

Sin embargo, esta ausencia de personalidad en lo civil no ha supuesto la exclusión de la herencia yacente como sujeto procesal. Suele ser frecuente explicar la capacidad para ser parte y la capacidad procesal como correlatos para el proceso de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar civiles; no obstante, la equivalencia no es total, pues el Derecho Procesal también atribuye capacidad a entes sin personalidad jurídica, siendo el de la herencia yacente uno de los ejemplos más claros –como también lo suele ser la masa de la quiebra o del concurso de acreedores–.

Así, en no pocas ocasiones nuestros Tribunales han reconocido a la herencia yacente capacidad para ser parte en un proceso, esto es, para asumir los derechos, deberes y cargas inherentes a quien ocupa la posición de litigante (cfr. las SSTs de 20 de septiembre de 1982 –RAJ 4920–, de 12 de marzo de 1987 –RAJ 1435–, de 7 de mayo de 1990 –RAJ 3689– y de 21 de mayo de 1991 –RAJ 3779–; asimismo las SSAP Valencia, Sección 7ª, de 30 de septiembre de 1992 –AC 1287–, Huelva de 24 de junio de 1994 –AC 1147–, Burgos, Sección 2ª, de 14 de julio de 1998 –AC 6163–, Madrid, Sección 19ª, de 24 de septiembre de 1999 –AC 7264–, Toledo, Sección 1ª, de 9 de diciembre de 1999 –AC 8509– y Almería, Sección 2ª, de 21 de enero de 2000 –AC 692–). Ahora bien, también ha de señalarse cómo, en algún supuesto, se ha negado por la jurisprudencia esta posibilidad (Cfr. SSTs de 20 de marzo de 1916 y de 10 de noviembre de 1981 –RAJ 4471–; igualmente SAP Cáceres, Sección 2ª, de 5 de abril de 1995 –AC 668–). Dentro de esta segunda línea se incluye justamente la sentencia objeto del presente comentario, aunque con un argumento ciertamente singular: sería lo provisional o interino de la situación de yacencia hereditaria lo que haría inadecuado reconocer a la masa patrimonial capacidad –y, con ella, también legitimación– para ejercitar una acción. Se trata de una justificación insostenible, que conduce a un callejón sin salida: en efecto, es precisamente el carácter indefinido de esa situación transitoria el que obliga a admitir a las herencias yacentes como partes en un proceso, como forma de evitar los perjuicios materiales que podrían derivarse de su perpetuación en el tiempo.

Por otra parte, debe matizarse que en la gran mayoría de supuestos en que se ha reconocido a la herencia yacente capacidad para ser parte, se ha hecho dando por supuesto que habría de asumir en el proceso la condición de demandado, esto es, se le reconoce capacidad a los solos efectos de permitir su legitimación pasiva, en garantía de los derechos que terceros pudieran ostentar respecto del patrimonio hereditario yacente. A nuestro juicio, esta restricción carece de sentido y debe achacarse únicamente a las circunstancias de los supuestos en que el tema se planteó a los Tribunales en cada una de las situaciones en que se vieron llamados a resolverlo. Pero no puede negarse *a priori* que una herencia yacente utilice su capacidad para ser parte para asumir la condición de demandante y ejercitar en juicio aquellas acciones destinadas a su

propia protección o conservación (y esto, en un plano general, también lo da a entender, paradójicamente, la sentencia que se comenta, aunque después, *in concreto*, rechace la presencia en el proceso de la herencia yacente).

Sea como fuere, la cuestión ha dejado de ser problemática tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que expresamente reconoce en su art. 6.1.4º la capacidad para ser parte de “las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración”. Se trata, además, de un reconocimiento de capacidad que no se vincula con la asunción del *status* de parte demandada –como hace, en cambio, el art. 6.2 respecto de las sociedades mercantiles irregulares–, lo que permite sostener sin temor a error que esta capacidad para ser parte permitirá tanto que la herencia yacente sea demanda como que sea ella misma la parte demandante, cuando así resulte preciso para la defensa de su interés.

Resuelto el problema de la capacidad para ser parte –y aclarado que no hay óbices a que, con base en ella, en un caso concreto la herencia yacente ostente la legitimación activa–, debe abordarse la cuestión relativa a su capacidad procesal y a su comparecencia en juicio. Porque, en tanto que ente abstracto, la herencia yacente necesita de una o varias personas físicas que constituyan el soporte o centro de imputación de todas sus actuaciones procesales.

La jurisprudencia anterior a la LEC de 2000 consideró, con base en el art. 1026 II CC, que la representación necesaria de la herencia yacente correspondía a los albaceas o administradores, si es que existían –lo cual resulta frecuente para los supuestos de sucesión testamentaria, pero también cuando se ha incoado un procedimiento para la declaración de herederos abintestato (en cuyo caso resulta de aplicación el art. 1008 de la LEC de 1881)– (por todas, cfr. la STS de 12 de marzo de 1987 –RAJ 1435–); y, en caso de no haberlos, serían los llamados a la herencia quienes deberían actuar en juicio en nombre de la herencia yacente –arg. *ex* art. 999 IV CC, *a contrario sensu*– (SAP Las Palmas, Sección 4ª, de 15 de junio de 1999 –AC 8111–) (al respecto debe precisarse que, aunque se les suela llamar “herederos”, estos sujetos no lo son aún, puesto que de serlo no se daría la situación de yacencia hereditaria...).

A los mismos resultados debe conducir la aplicación de la LEC de 2000, pues su art. 7.5 establece que “las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren”; y en semejante sentido se expresa el art. 798.1, en virtud del cual “mientras la herencia no haya sido aceptada por los herederos, el administrador de los bienes representará a la herencia en todos los pleitos que se promuevan o que estuvieren principiados al fallecer el causante y ejercitará en dicha representación las acciones que pudieran corresponder al difunto, hasta que se haga la declaración de herederos”.

Si todo lo anterior se comprende con sencillez –más aún ante la claridad de los términos en que se expresa la LEC de 2000–, se pueden plantear en la práctica ciertos problemas singulares, que merecen al menos que se les dediquen en esta sede unas breves líneas.

En primer término, se puede razonablemente imaginar que el demandante ignore, al tiempo de interponer su demanda, si la herencia de su deudor ha sido ya aceptada o si, por el contrario, aún se encuentra yacente. La duda, claro está, afecta a la determinación de la legitimación pasiva (¿ha de demandarse al heredero, o a la herencia yacente?) y el error puede conducir a la desestimación de la demanda. En alguna ocasión, la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de que se dirija la demanda a título principal contra los llamados a la herencia en tanto que herederos y, a título subsidiario, frente a la herencia yacente, para el caso de que los anteriores no hubiesen aceptado aún (STS de 7 de mayo de 1990 –RAJ 3689–). Con la ley en la mano, también puede pensarse en el recurso, antes de interponer la demanda, a la diligencia preliminar regulada en el apartado 1º del art. 256.1 LEC, dirigida frente a los llamados a la herencia, para lograr que declaren si la han aceptado, la han repudiado o aún no han manifestado su voluntad al respecto.

También es posible que, habiendo sido llamados varios sujetos a la herencia, sólo alguno de ellos haya aceptado, mientras que otro u otros aún no se hayan pronunciado. En tal caso, y a juicio de la jurisprudencia, la herencia está aún parcialmente yacente –en la cuota en principio correspondiente a los llamados que no la han aceptado ni repudiado–, razón por la cual habrá de dirigirse la demanda en litisconsorcio frente al heredero y a la herencia yacente (SAP Burgos, Sección 2ª, de 14 de julio de 1998 –AC 6163–) salvo que, por alguna razón, estuviese claro que la responsabilidad le corresponde en exclusiva a alguno de ellos.

Finalmente, puede suceder que, demandada la herencia yacente, se produzca la aceptación de la herencia durante la pendency del proceso. En tal caso, pensamos que deben aplicarse las normas de la LEC en materia de sucesión procesal y cambio de partes (arts. 16 y 17), con independencia de que desde una perspectiva estrictamente civil no pueda hablarse de una transmisión de derechos desde la herencia yacente al heredero, sino directamente desde el causante al heredero.